

# Las universidades afrontan Bolonia en plena crisis económica

Las amenazas de recortes, riesgo para afrontar con garantías el Espacio Europeo

M. ASENJO/ E. ARMORA

MADRID/BARCELONA. El curso universitario ha comenzado bajo negros nubarrones provocados por la crisis económica. La ya difícil gestión de unas arcas que no suelen brillar por la sobreabundancia se ve complicada por un periodo donde la amenaza de los recortes suena como un eco en los campus.

Todos los rectores sin excepción se han referido a esta circunstancia en sus discursos de comienzo de curso. Y pese a que las autoridades regionales —también en su mayoría— se han comprometido a no recortar los presupuestos universitarios, la realidad es otra y ya se atisba, e incluso se comprueba, alguna reducción de los fondos, incluso de los ya comprometidos.

## Vías de financiación

Las universidades se financian por diferentes vías. Por un lado, la subvención nominativa que reciben de las administraciones y que en el peor de los casos cubre entre el 50 y 60% del capítulo 1, fundamentalmente personal y gastos corrientes. Otras fuente de recursos son las tasas que pagan los alumnos y que no superan el 17% del total. Las universidades también generan recursos mediante convenios y contratos por prestación de servicios y a través de la investigación. Existe otro capítulo cerrado que corresponde a las inversiones y que llegan a los rectorados por la senda de los contratos programa.

En la actualidad, el gasto en universidad apenas supone el 1% del Producto Interior Bruto, mientras que en los países de nuestro entorno es al menos del 1,6%. El objetivo es alcanzar este porcentaje en el menor tiempo pero las previsiones apuntan a la baja.

Y es que las administraciones han hecho llegar a las universidades el mensaje de que «la situación es muy mala y que, por tanto, hay que cortar por todos los lados». Estos re-

cortes podrían hacerse realidad de inmediato en algunas de las autonomías con mayor número de universidades. Es el caso de Madrid, donde se teme que se recorten hasta las partidas ya comprometidas. Se habla de que la subvención nominativa de fechas inmediatas puede ser menor.

## Disminuyen los alumnos

Además, y en general, los ingresos por tasas serán también menores, ya que disminuye el número de alumnos. Según los últimos datos estadísticos, en el curso 2006-07 la matrícula en primero y segundo ciclo descendió en un 1,6% y la tendencia se mantiene.

El rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, manifestó en la inauguración conjunta del curso en la Comunidad de Madrid que «nos encontramos actualmente ante un difícil escenario nacional e internacional». Y en este contexto pidió «acuerdos que excluyan la Educación de las pugnas partidistas. El sistema de enseñanza español debe ser ambicioso y, por tanto, debe ser un proyecto a largo plazo, con grandeza de miras y con tiempo para desarrollarse».

Los rectores gallegos entienden que el plan de financiación de sus universidades no está bien resuelto, pese al anuncio del Gobierno regional de inyectar once millones de euros en el sistema. Las universidades «no pueden seguir así», ha declarado el rector de Santiago de Compostela Senén Barro, quien ha calificado la situación como «muy grave». Las universidades valencianas tampoco viven en la abundancia, su situación económica es

**La mayoría de los campus públicos han decidido esperar al próximo curso para ofrecer nuevos títulos**

**La recesión económica ponen en peligro incluso partidas presupuestarias ya comprometidas**

**Las administraciones advierten a las universidades de que en época de recesión será preciso recortar**



El proceso de Bolonia ha sido contestado en la Universidad y ahora afronta la crisis

FRANCISCO SECO

«difícil». La intranquilidad por la situación crece también entre los rectores catalanes que ven como acaba el año y no han recibido la partida adicional que les prometió la Generalitat a finales de 2007 para ayudarles a reducir el déficit y afrontar los cambios que conlleva el Proceso de Bolonia.

Los responsables académicos temen que los 50,9 millones

de euros —a repartir entre todos los centros en función de las dimensiones y objetivos de cada uno de ellos— no lleguen este año y se incluyan en los presupuestos de 2009. De confirmarse ese aplazamiento, que algunas fuentes dan por sentado, las cuentas de la mayoría de las universidades, y en especial la de Barcelona (UB) y la Politécnica de Cataluña

(UPC) —las dos que acumulan más déficit—, sufrirían un importante «shock» económico. Fuentes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) aseguraron a este diario que «a día de hoy, el centro no ha recibido ninguna partida adicional del Gobierno catalán». Tampoco la Universidad Politécnica tiene buenos augurios al respecto.

En este escenario, la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el que se inspira en la Declaración de Bolonia, apremia. Las universidades públicas apenas se han atrevido a poner en marcha titulaciones nuevas o adaptadas a las exigencias de ese espacio común. En realidad, sólo la Carlos III de Madrid ofrecerá casi la tota-

## La privada puede superar los 7.000 euros al año

La Universidad privada cuesta como media a los estudiantes de la Comunidad de Madrid 7.340 euros, lo que supone que este tipo de Educación superior multiplica hasta nueve veces el precio que conlleva estudiar en la pública, que se sitúa en los 800 euros, según un estudio realizado por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI). Así, estudiar en la Universidad Europea, la más cara de las privadas, significa desembolsar 9.250 euros como coste medio, y la Francisco de Vitoria, la más barata de las de este carácter, cuesta 5.250 euros de media, siempre según el estudio. Además, pagar los estudios y el alojamiento en la región puede suponer hasta «18.000 euros para los padres de estos estudiantes, que deben pagar tanto la matrícula, como las mensualidades, y los libros y materiales», agregó FUCI. El estudio ha sido realizado sobre catorce universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid y ha tomado como muestra las más de 650 titulaciones existentes. La organización explicó que las universidades públicas con mayor número de carreras experimentales son más caras. Los libros y el material necesario para el curso también encarecen el estudio, lo mismo que el alojamiento. En este caso, la opción más cara es la estancia en un colegio mayor o en una residencia, cuyo coste se eleva a unos 750 euros.

lidad de sus estudios conforme al nuevo modelo. Sin embargo, las privadas han sido más atrevidas y ofrecen dos tercios de las 162 títulos valorados favorablemente por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

El curso próximo (2009-10), las universidades deberán adaptar toda su oferta y en tiempo de ajuste económico, que no de expansión, corren el riesgo de hacerlo sin las garantías suficientes. Como advierte el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda, el cambio de modelo, con una enseñanza más participativa y activa, exige más recursos y «aunque es un camino sin retorno, va a ser difícil afrontarlo sin problemas».

# Padres objetores presentan 150 recursos contra Ciudadanía en el TSJ de Valencia

La Concapa está dispuesta a llegar hasta Estrasburgo «para defender nuestros derechos»

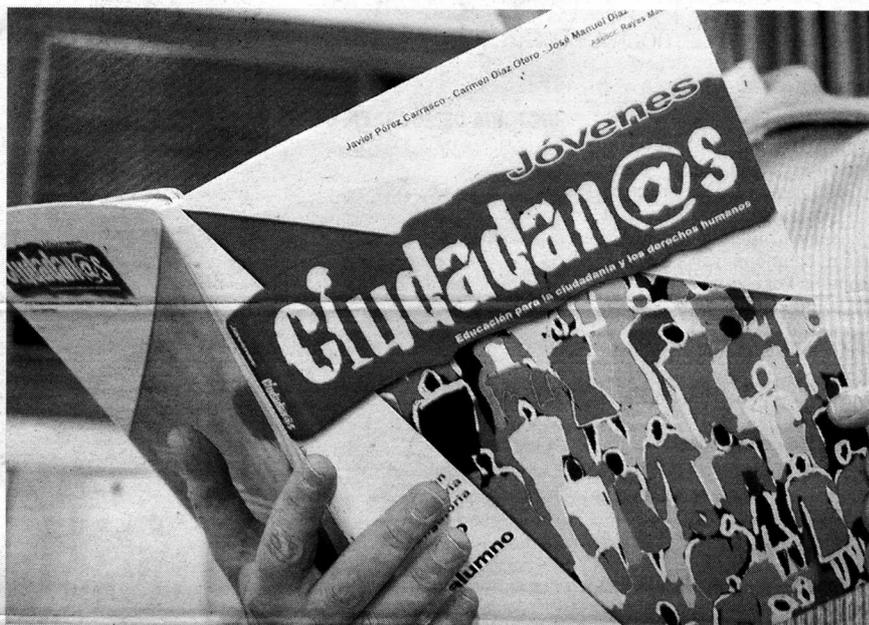
## LUZ DERQUI

VALENCIA. Las familias valencianas que no quieren que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía (EpC) han comenzado ya a llevar sus reivindicaciones a los tribunales. Ayer la Confederación Católica de Padres Concapa presentaba los primeros 150 recursos ante el Tribunal Superior de Justicia y la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) presentó el viernes una docena más advirtiendo que «esto es sólo el principio», ya que anunciaron nuevos recursos.

Ambas entidades criticaron el silencio de la Administración ante los recursos presentados por los padres. Un silencio administrativo que está provocando desconcierto, ya que además en cada centro escolar se les da a los alumnos diferente respuesta cuando presentan la objeción.

Los padres reiteraron que la asignatura vulnera su derecho a educar a sus hijos «de acuerdo con nuestras creencias» y se mostraron decididos a «romper la inercia provocada por la actuación administrativa», según Jorge Sánchez-Tarazaga, abogado y padre objetor.

Por su parte, el presidente de la Concapa, Nicolás Sánchez, confirmó que los padres están dispuestos a llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en caso de que no se reconozca sus derechos. En este sentido, ambas entidades exigieron que se cumpla la instrucción de la Consejería de Educación que insta a



Educación para la Ciudadanía sigue generando polémica en el mundo educativo

MANUEL MIRO

los centros a atender a los hijos de los objetores mientras sus compañeros están en clase de EpC, ya que según denunció Sánchez-Tarazaga, a muchos de estos alumnos se les obliga a permanecer en el aula.

En cualquier caso, en la Comunidad se mantiene otro frente abierto a cuenta de Educación para la Ciudadanía y es el rechazo de padres y sindicatos a que se imparta en inglés. En este sentido, la Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA-Valencia) anunció ayer que han reunido un total de

## Cabrera afirma que la opción de la asignatura en inglés es legítima siempre que se cuente con docentes preparados

1.122 recursos contra la orden de la Consejería que regula la enseñanza en inglés de la asignatura. Asimismo, anunció que los centros públicos están tramitando dichos recur-

sos a su dirección territorial para que los haga llegar a la Consejería de Educación, y amenazaron con iniciar un contencioso administrativo contra la Generalitat.

Precisamente este nuevo frente abierto contra la Consejería, que dirige Font de Mora, se produce el mismo día en el que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, reiteraba que la enseñanza de Ciudadanía en inglés es una «opción perfectamente legítima en la Ley Orgánica de Educación (LOE), siempre y cuando se disponga de los profesores necesarios para hacerlo». No obstante, Cabrera matizó que la decisión del Gobierno de Camps ha introducido a la educación en «una dinámica de comienzo de curso muy complicada».

## Rechazo de recursos en Navarra

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado el recurso presentado por varios padres que pedían para su hijos el reconocimiento de la objeción de conciencia. Asimismo, la Comunidad de Madrid ya ha recibido el requerimiento del Ministerio de Educación para instarle a cumplir la ley y obligar a todos los alumnos a cursar la asignatura. Aguirre ha ofrecido a los objetores la alternativa de un trabajo personal o acciones de voluntariado.

## Una de cada diez llamadas al Defensor del Profesor denuncia agresiones en clase

### M. A.

MADRID. Alrededor del nueve por ciento de las llamadas al Defensor del Profesor de la Comunidad de Madrid, un servicio telefónico de ayuda a los docentes puesto en marcha por el Sindicato ANPE, corresponden a profesores que han sufrido casos de violencia por parte de los alumnos en clase. Así lo ha manifestado la coordinadora de este servicio, Inmaculada Suárez, a Ep.

Además, destaca el caso de un docente madrileño que fue

agredido por uno de los alumnos e incluso denunciado por los padres. «La Administración —asegura la coordinadora del Defensor del Profesor— se lavó las manos» y ni siquiera concedió al profesor la presunción de inocencia. «Estos casos —comenta— te dejan con un mal sabor de boca y con una gran sensación de impotencia».

Así las cosas, el Defensor del Profesor, utilizado por un elevado número de docentes, exige «que se cumpla» en centros escolares la normativa

que regula los derechos y deberes del profesorado «para que se respete su autoridad» y puedan ejercer su profesión «con normalidad».

La responsable del Defensor explica que los maestros —procedan de la enseñanza pública, privada o concertada— carecen de «toda autoridad» en clase frente a los alumnos, los padres e incluso la Administración. Además, considera que en numerosas ocasiones se llega a faltar a «su presunción de veracidad».